

Sección latinoamericana

ARGENTINA

La política económica después del golpe militar

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su último informe sobre la región, señaló que el producto interno bruto (PIB) de Argentina se redujo 1,4% durante 1975, en comparación con el aumento de 6,6% registrado en 1974. El estudio confirma la impresión que existía en algunos medios privados de ese país de que la recesión iniciada a mediados de 1975 sería mucho más profunda que lo calculado inicialmente. El actual ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, ya había adelantado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el 28 de julio último, que en el primer trimestre de 1976 el PIB había descendido 3,5%, el consumo había retrocedido 5% y la inversión bruta interna declinó 20%. Pocos días después, el matutino *La Opinión* dio a conocer una discutida estimación de un industrial, en la que se anticipaba que la caída del producto interno bruto durante el año en curso sería de tal magnitud que el país tardaría una década para volver al nivel económico de 1974. Sin llegar a este extremo, no podría descartarse que la declinación del PIB durante el año en curso llegara finalmente a una cifra que podría oscilar entre 8 y 10 por ciento, con lo que se trataría de la peor recesión sufrida por Argentina desde que se compilan estadísticas sobre ingreso nacional.

La recesión estuvo precedida por un

proceso inflacionario singularmente agudo. En el memorándum que el Ministerio de Economía de Argentina dirigió al Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio pasado, se consignaba que "en los doce meses que terminaron en abril de 1976 el costo de la vida aumentó casi 800% y los precios mayoristas más de 900%. En marzo pasado esta última serie había registrado un crecimiento récord mensual de 54 por ciento.

En el documento mencionado se enumeran una serie de datos que pueden dar una idea bastante aproximada de la magnitud de los problemas que enfrentaba el Gobierno argentino. El déficit del presupuesto representaba, a fines de abril del presente año, 78% del gasto total y 13% del PIB (para apreciar el significado de esta última proporción, vale la pena señalar que en 1970 la relación del déficit con respecto al producto bruto era de 0,9%; en 1972, de 3%, y en 1973, de 5,6%). El déficit de la balanza de pagos era, a aquella fecha, superior a los 700 millones de dólares estadounidenses y las reservas internacionales de libre convertibilidad apenas llegaban, en la tercera semana de marzo, a menos de 10 millones de la misma moneda.

El Gobierno resultante del golpe militar que el 24 de marzo último destituyó a la ex-presidenta María Estela (Isabel) Martínez de Perón, sancionó un programa económico anunciado al país el 2 de abril último. Las medidas recibieron el respaldo de los técnicos y del directorio del Fondo Monetario Internacional, y están basadas en un programa preparado por las actuales autoridades económicas, que alcanzó cierta difusión en los días inmediatamente anteriores al golpe.

Las metas enunciadas para la nueva política económica consisten en liberalizar la economía; alcanzar una inmediata reducción de la inflación; fortalecer la balanza de pagos y las finanzas públicas, y mejorar el nivel de la vida de la

población mediante el incremento de la productividad. Según sus propios responsables, con la aplicación de esa política se consiguió reducir el ritmo de la inflación en junio y en julio, obtener préstamos a corto plazo en bancos comerciales para aliviar la presión sobre la balanza de pagos, aumentar las reservas externas de libre disponibilidad, empezar a eliminar las distorsiones de los precios relativos y disminuir el déficit del sector público.

Al trazar un balance de los primeros logros obtenidos por la nueva política económica, el ministro Martínez de Hoz puso énfasis en señalar, tal como lo hiciera el ex-ministro Adalberto Krieger Vasena en 1969, que "éste no es un cambio más, de los tantos que ha vivido el país en los últimos años, sino que significa realmente dar vuelta a una página de la historia política, económica y social argentina, que es el comienzo de una nueva era".

Más adelante, en la misma disertación, el doctor Martínez de Hoz puntualizó que "la balanza comercial argentina, de un saldo deficitario de 1 000 millones de dólares en 1975 ha pasado este año no sólo a equilibrarse sino a presentar aun un saldo positivo, como se comprobará a fin de año. Y en cuanto a la balanza de pagos, de un saldo negativo de 700 millones de dólares quedará reducido a menos de la mitad en el curso de 1976. La cuenta corriente, de un saldo negativo de 1 300 millones de dólares en 1975, estará solamente en alrededor de un saldo negativo de 40 millones de dólares en el actual, de acuerdo con la estimación presente.

"Las reservas brutas del Banco Central en marzo de este año ascendían a 600 millones de dólares. Hoy han pasado los 1 400 millones de dólares; y las reservas líquidas, que en marzo apenas podían contarse en diez millones de dólares, hoy han sobrepasado los 600 millones de dólares."

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en los casos en que así se manifieste.

El déficit del presupuesto, según las actuales autoridades, es "la base y el nudo del problema económico argentino" y se habría originado en el aumento del empleo en el sector público —que parece haber crecido 24% en los últimos tres años—, en un incremento de las transferencias de la Tesorería General de la Nación a las provincias y a las empresas estatales, en la mayor gravitación de los reembolsos impositivos concedidos a las exportaciones promocionadas, preferentemente de origen industrial, en los subsidios indirectos al consumo y en el natural deterioro que sufren los ingresos fiscales en términos reales, cuando están sometidos a un creciente proceso inflacionario.

De ahí que en el programa antiinflacionario se haya hecho especial hincapié en la reducción del empleo en el sector público, en la disminución de las transferencias del Gobierno nacional a las provincias y a las empresas estatales y en la progresiva desaparición de los subsidios. Para conseguir este propósito se ha previsto aumentar los recursos impositivos de las provincias y las tarifas de los servicios públicos. En el orden nacional, para mejorar la recaudación, se introdujo una reforma impositiva que incluye una serie de impuestos de urgencia de carácter marcadamente "regresivo", según la opinión emitida hace más de dos meses por un grupo de economistas del Partido Radical. Dichos impuestos gravan los consumos generales (a través del aumento en la tasa del impuesto al valor agregado) y los mismos salarios. En este último caso, el anuncio de la aplicación del impuesto generó resistencias entre los militares y el proyecto tuvo que ser sometido a discusiones y ajustes. Los impuestos de urgencia gravan también a la propiedad inmobiliaria y a los vehículos automotores en circulación.

El déficit fiscal fue absorbido en parte por el aumento de la deuda pública interna, a través de los valores nacionales ajustables y de otros títulos sujetos a corrección monetaria. Pero el auge de los valores ajustables provocó una situación contradictoria, porque la especulación con los títulos rendía un beneficio incomparablemente más alto que cualquier otra inversión productiva. Incluso un periódico oficialista, *La Razón*, se preguntó en su edición del 19 de abril de 1976: "¿Qué empresario va a comprar una máquina si el mismo capital puede multiplicarse por cinco o diez a

breve plazo, sólo colocándolo en bonos indexados?"*

Aunque el déficit fiscal constituyera el gran alimento de la inflación, el alza de los precios también obedece a otras motivaciones. La inflación generada por el déficit fiscal se realimenta con la lucha de los asalariados para no perder posiciones en el reparto del ingreso nacional, que se traduce en periódicas reclamaciones de aumentos en las remuneraciones y en el intento de frenar la escalada de los precios con medidas de control, que —según la actual conducción económica— produjeron distorsiones en el sistema de precios relativos, provocaron desabastecimiento y operaciones de mercado negro y fomentaron la declinación de la inversión privada.

Para enfrentar esta situación, el actual Gobierno liberó los precios y congeló los salarios, con el criterio de que los aumentos nominales son efímeros y que el verdadero incremento del salario real sólo puede sobrevenir por medio de mejoras en la productividad. Como consecuencia de ello, los precios al consumidor (serie desestacionalizada), que en febrero habían aumentado 19.3% y en marzo 38%, crecieron a menor velocidad, ya que en abril aumentaron 34.6%; en mayo, 13.1%, y en junio sólo se expandieron 2.8%. No obstante, en julio el ritmo de aumento volvió a intensificarse y la estadística registró 4.3 por ciento.

Entretanto, los aumentos de salarios otorgados en 1976 por el gobierno de María Estela (Isabel) Martínez de Perón, habían sido de 18% el 1 de enero, y de 20% a partir del 1 de marzo. El Gobierno militar, por su parte, concedió un aumento de 15% a partir del 1 de junio último. El retraso de los salarios con respecto a los precios había hecho declinar el salario real 13.4% en diciembre de 1975 (con respecto a igual mes de 1974) y 43.2% si se comparaba el nivel de julio de 1976 con el de diciembre de 1975. Por consiguiente, en julio de 1976 los salarios reales habían disminuido 50.8% con respecto al promedio imperante en 1974, según un informe del Banco Central comentado por el diario *La Nación* en su edición del 5 de agosto último.

* *Comercio Exterior* ha adoptado, de acuerdo con la traducción de las Naciones Unidas, del término inglés *indexation*, el uso de "indización", "indizar" e "indizados" para significar cuestiones referentes a la vinculación de un índice de precios con otro índice o con el valor de algo. De esta forma, se diría "bonos indizados".

Ultima Clave, influyente revista de circulación restringida, planteó la preocupación que debía causar la baja del salario real, y *Los Principios*, de Córdoba, el 7 de julio de 1976 expresó crudamente que "el precio de la reconstrucción debe ser pagado por todos en la medida de lo que cada cual disponga, y no solamente por los que no tienen ni dónde caerse muertos".

Completando el programa de liberación de precios y de reducción del salario real, la conducción económica procedió a contener la expansión monetaria, fijando límites para el crédito bancario a la Tesorería General de la Nación, a las entidades públicas y al sector privado. La limitación del crédito bancario se completó con la indización de los activos financieros y con la liberación, o la elevación, según el caso, de las tasas de interés. En consecuencia, se redujo la liquidez general de la economía (que ya se había contraído considerablemente a lo largo de 1975) y se elevó el costo del dinero.

El proceso inflacionario interno no tuvo como respuesta una adecuada corrección de los tipos de cambio que —al permanecer estáticos— dieron lugar a una sobrevaluación del peso argentino, con la consiguiente reducción de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Como consecuencia de ello, la balanza comercial de 1975 arrojó un saldo negativo de 1 000 millones de dólares y la balanza de pagos tuvo un efecto negativo de 700 millones de dólares. Las reservas brutas del Banco Central, que en junio de 1974 habían alcanzado a 2 200 millones de dólares, estaban en marzo de 1976 en un nivel de 600 millones. En el mercado paralelo (libre) de cambios, la divisa norteamericana, que se cotizaba a 10 pesos a mediados de 1974, se negociaba a un precio de 350 a 380 pesos en vísperas del golpe militar. En la actualidad, la cotización libre es de alrededor de 250 pesos.

El propósito del Gobierno militar es el de sustituir el sistema cambiario múltiple que consta de un tipo de cambio oficial fijo, un tipo de cambio libre y tres tipos intermedios (a través de los cuales todavía se desenvuelven la mayor parte de las operaciones de exportación y de importación), por un tipo de cambio libre y único. El tránsito de uno a otro sistema será gradual, aunque ya se han dado varios pasos en ese sentido, al aumentar periódicamente la proporción de divisas que se debe negociar por el

mercado libre, dentro de los tipos de cambio intermedios o combinados. El tipo de cambio libre, o —en el ínterin— el tipo de cambio intermedio, favorecerá las exportaciones básicas del país, que son las de origen agropecuario. De ellas, tienen preeminencia en la actualidad los granos (trigo, maíz), debido al alza de los precios internacionales de los productos agrícolas, motivada a su vez por la recuperación de las economías de los países altamente industrializados, y por la sequía en el hemisferio norte, que ha contraído la oferta mundial de granos, particularmente en el Mercado Común Europeo.

La ganadería, en cambio, no ha alcanzado todavía una situación similar, y muchos de sus representantes insisten en la importancia de vigilar el poder adquisitivo del mercado interno para aumentar las ventas. Los bajos precios se deben, en parte, a la excesiva oferta internacional provocada por la liquidación de los inventarios de carne en Europa. Pero el equipo económico argentino prevé que, en los próximos meses, los precios internacionales aumentarán precisamente a causa de la restricción de la oferta que seguirá a la actual liquidación de los planteles. Se estima que en 1976 el volumen del comercio internacional de carnes será de 2.5 millones de toneladas, lo que implica una recuperación con respecto a los dos años inmediatos anteriores. Así, aparentemente Argentina podría llegar a cubrir el 20% de la oferta total, una proporción bastante mayor que la de los tres años inmediatos anteriores. Aunque todavía inferior al promedio correspondiente a la década de los 60. El Gobierno reconoce que la ganadería está actualmente en inferioridad de condiciones con respecto a la agricultura de la pampa húmeda, pero ha sancionado medidas impositivas de apoyo.

El camino hacia el mercado libre de cambios estará acompañado por la paulatina eliminación de las restricciones a las transferencias internacionales, fomentándose el endeudamiento para financiar importaciones de bienes de capital. Esta actitud está directamente relacionada con el nuevo tratamiento otorgado a los capitales extranjeros. Si bien la reciente Ley núm. 21382 no contiene beneficios promocionales directos para la entrada de capitales del exterior, elimina las trabas del régimen anterior, sobre todo en relación con la utilización del crédito bancario interno. Con respecto a las remesas al exterior, la nueva Ley no opone restricciones para las transferen-

cias siempre que haya libertad de cambios. Pero, en caso de dificultades con los pagos externos, puede suspenderse el derecho a las remesas, otorgando en su lugar títulos de la deuda pública, realizables en moneda fuerte. Las remesas de utilidades que excedan de 12% del capital registrado estarán sujetas al pago de un impuesto especial.

A fines de julio último, el ministro Martínez de Hoz prometió que pronto se pasaría a una etapa de reorganización que consistiría esencialmente en lograr la reactivación de la economía: "podemos decir, entonces, que comienza la etapa de la reactivación económica del país" (discurso ya citado, ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), pero advirtió que el proceso de salir de la recesión llevaría su tiempo.

El problema fundamental radica en que muchas medidas de carácter antiinflacionario no han hecho más que profundizar la recesión. La reducción del déficit fiscal a través del desempleo en el sector público, la aplicación de una reforma impositiva de carácter regresivo, la continuada devaluación en el tipo de cambio para las exportaciones y las importaciones, combinada con el brusco aumento en los precios agrícolas internos y la reducción de las importaciones más el descenso de la liquidez monetaria y la tremenda caída del salario real van estrechando ineludiblemente el mercado interno para la industria que sólo puede ser neutralizado, en muy pocos casos, por la exportación, ya que el Gobierno también ha encarado la reducción de los reembolsos impositivos y ha concentrado el esfuerzo exportador en los renglones tradicionales, particularmente la agricultura de la pampa húmeda.

A raíz de esta situación, la industria manufacturera ha entrado en una recesión de una profundidad inigualada en Argentina. Las empresas afectadas no son sólo las de mediana y pequeña dimensión —especialmente golpeadas por el agudo proceso de concentración determinado por el estrechamiento del mercado, el aumento de los costos y las dificultades para obtener créditos—, sino también a las grandes empresas, entre ellas las fábricas productoras de automóviles. El diario *Los Principios*, de Córdoba, expresó en su editorial del 7 de julio pasado: "Lo que comenzó siendo un cierre temporario de algunos establecimientos pequeños es ya una ola que cubre grandes industrias y abarca períodos por encima de lo socialmente tolerable".

Los siguientes índices comparativos, extraídos de *Tendencias Económicas* (números 575 a 577) resultan suficientemente ilustrativos a pesar de que el mes tomado para la comparación es el de julio y en 1975 la recesión empezó a verificarse a partir de junio, cuando tuvo lugar lo que en Argentina se conoce como "el rodrigazo", es decir, la gestión, al frente de la cartera de Economía, del ingeniero Celestino Rodrigo, integrante del "clan" del ex-ministro José López Rega, secretario privado del general Perón y de la señora María Estela (Isabel) Martínez, que se inició con una fuerte devaluación del peso y con una acentuada liberación de precios.

Rama de la industria	Índice de ventas deflacionadas (1963 = 100)	
	Julio 1975	Julio 1976
Química	470	356
Plástica	434	275
Artículos para el hogar	153	77
Automotores	168	161
Aluminio ¹	90	48

1. La base 1963 = 100 no es válida para esta rama.

La magnitud de la recesión y del desplazamiento de ingresos hacia la producción agrícola ha dado lugar a que algunos sectores se pregunten si no existe un particular interés en producir tales efectos. En ese caso, el equipo económico del Gobierno militar estaría llevando a cabo una política excluyente, de promoción a cualquier precio del sector agropecuario y especialmente de la producción agrícola de la pampa húmeda, donde es dominante el poder económico de las grandes familias tradicionales de terratenientes, grupo social al que pertenece el ministro Martínez de Hoz, que también ha sido destacado ejecutivo de la gran industria.

La inquietud ha llegado a plantearse aun entre los defensores de la actual política económica. La revista mensual *Carta Política*, dirigida por el periodista Mariano Grondona, que se identifica plenamente con el contenido ideológico del actual equipo de gobierno (esta aclaración es válida porque Mariano Grondona también defendía en sus notas a otros gobiernos de naturaleza política diferente, incluso al del propio general Perón), efectuó el siguiente comentario sobre los precios agrícolas en el número 33, de julio de 1976: "Cuando en octubre co-

mienten a regir los [precios] correspondientes al inicio de la cosecha 1976/77, serán sustancialmente mayores que los actuales. Entretanto, se eliminarán totalmente los subsidios que el trigo y otros productos tienen cuando son utilizados como insumos industriales. Valga citar, como ejemplo, el precio del trigo para la industria molinera que ha pasado, en muy poco tiempo, de un costo de 2.50 pesos a 11, y que deberá pasar a 19 pesos o 23 a 25 pesos, aproximadamente, hacia el citado mes de octubre". La revista señala después que en los próximos meses también se espera un repunte considerable en los precios ganaderos, debido no sólo a la mejora de las cotizaciones en el mercado mundial, sino a la normalización del mercado interno argentino, por "la eliminación de la sobreoferta, la falta de animales terminados para la próxima primavera y la respuesta de los productores a un paquete de medidas esperadas", que posteriormente se produjeron.

En ese mismo número de *Carta Política*, el economista Juan Carlos de Pablo, que apoya la actual estrategia económica, pero que insiste en recomendar un sesgo más industrialista, comenta que en Argentina es frecuente que se afirme que no existe ninguna antinomia entre el campo y la industria, pero que la afirmación suele tener un contenido diferente si los que lo afirman son dirigentes industriales o agropecuarios, con la particularidad de que cuando lo proclaman los primeros no hacen lo mismo los segundos, y viceversa. De Pablo dice que en 1976 esa afirmación la hacían exclusivamente los dirigentes agropecuarios, por lo que supone que la omisión oculta "algo". Los dirigentes agropecuarios han señalado en reiteradas oportunidades que el Gobierno debe completar su política de apoyo al sector con una eliminación de los gravámenes a la exportación. De Pablo sostiene que "una política agropecuaria que partiendo de la situación actual eliminara las retenciones a la exportación, sin una adecuada compensación desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de los consumidores internos de bienes exportables, impactaría a la industria de la siguiente manera: 1) modificaría la composición sectorial de la demanda de productos industriales, ya que el sector rural y el sector urbano en general (y los asalariados en particular) no consumen los mismos productos; 2) reduciría (al menos temporariamente) la demanda global o total, al transferir

ingresos de sectores (Estado y asalariados) que gastan 'enseguida' a otros sectores que gastan 'sin tanto apuro', y 3) *comprometería al ritmo de formación de capital de la propia industria en la medida en que los obreros transfiriesen (aunque parcialmente) hacia el sector industrial, el deterioro del salario real causado por la política agropecuaria analizada*".¹ De Pablo concluye sosteniendo la necesidad de complementar la eliminación de gravámenes con un impuesto a la tierra y con la neutralización del efecto que tendrá sobre el mercado interno el aumento en el precio de los productos exportables.

Para adentrarse en el fenómeno señalado por De Pablo y comprender la importancia que ese hecho tiene en el desarrollo económico argentino, hay que hacer referencia a los factores de diverso tipo que explican la gravitación de la agricultura y de la ganadería de la pampa húmeda (donde se produce más de 80% de los bienes exportables argentinos) en la capacidad industrial del país.

El capitalismo argentino fue, en su origen, un capitalismo agrario. En un libro que la editorial Siglo XXI no pudo publicar en Buenos Aires por la actual situación política argentina, el economista Guillermo Flichman² sostiene que en Argentina la renta del suelo surge fundamentalmente de las diferencias internacionales de costos, originadas en las condiciones del suelo y del clima. La producción agropecuaria argentina, por su menor costo comparativo, abarató los salarios industriales en Europa y, por consiguiente, fomentó la acumulación. Pero, a la vez, ese proceso consolidó la renta agraria en Argentina y convirtió a los terratenientes de la pampa húmeda en integrantes del capitalismo mundial. Ese es el secreto de la fuerza de dicho sector social.

El posterior desarrollo industrial argentino tuvo su origen, precisamente, en la acumulación a partir de la renta agraria. Por eso, una gran parte de la industria no cuestiona el hecho de que, en determinadas circunstancias, la política agropecuaria limite sus posibilidades de expansión. Pero no toda la industria está conformada de acuerdo con las mismas características. Los cambios políticos introducidos por el peronismo en la década del cuarenta y la crisis en los merca-

dos internacionales de carne, cereales y oleaginosas fomentaron la expansión de sectores industriales de otro origen, que sí se sienten afectados cuando la política agropecuaria traslada ingresos hacia este último sector. Estas ramas industriales tuvieron singular significación en la Confederación General Económica (CGE) uno de cuyos dirigentes, José Gelbard, fue especialmente comisionado por el general Perón para llevar adelante la política económica del justicialismo, cuyos vestigios están borrando ahora los militares, dentro de una línea de política iniciada después de la muerte de Perón, cuando Gelbard fue separado del Ministerio de Economía. Un año y medio después los militares dieron el golpe de Estado y terminaron de desarmar lo que quedaba del aparato político y sindical del peronismo, la CGE fue intervenida y sus principales dirigentes debieron abandonar el país.

La política de precios altos para la producción agropecuaria limita el desarrollo industrial a través de la devaluación y la baja de los salarios reales, porque la pampa húmeda produce los alimentos que consumen los asalariados. Cuando aumentan los precios relativos internos para la producción agropecuaria a partir de una devaluación monetaria, los salarios pierden capacidad de consumo y la retracción en la demanda afecta a la industria.

Por consiguiente, no es el nuevo sector industrial el que puede ejercer la mayor presión social contra una política de altos precios relativos para la producción agropecuaria. Los asalariados coinciden transitoriamente con ese interés, pero tienen un instrumento mucho más eficaz para luchar por una política de altos salarios reales, favorable a la acumulación industrial: los sindicatos, desarrollados por el peronismo. La crisis política que sobrevino después del decenio de los treinta, que marcó el estancamiento de la tradicional estrategia agropecuaria debido a la crisis en el mercado mundial de carnes y cereales, fomentó el desarrollo del peronismo y del movimiento sindical. La reconstrucción política y económica del Estado no pudo materializarse sin que los terratenientes cedieran una parte creciente de su ingreso a los asalariados, a la industria y al aparato del Estado. Pero el sector agropecuario esperó, durante treinta años, el momento de resarcirse. El desmoronamiento del peronismo les brindó la gran oportunidad. Ahora, la política economi-

1. El subrayado es de la Redacción.

2. "Renta del suelo y desarrollo agrario argentino" (inédito).

ca de los militares consiste en volver al esquema tradicional de desarrollo, a partir de la exportación agropecuaria. El esquema de distribuir más equitativamente los ingresos entre el sector agropecuario, la industria y los asalariados sufrió múltiples vicisitudes en los últimos treinta años, pero nunca se había intentado un pleno retorno a los moldes de 1930. Eso es lo que ha sucedido ahora.

Sin embargo, el modelo de crecimiento a partir de la exportación agropecuaria ofrece muchas limitaciones, quizá insalvables. Los sectores conservadores, inclinados a esa política, que tan celosos se muestran de la eficiencia productiva, no parecen tener en cuenta la propia productividad de la economía agropecuaria. El fenómeno fue reiteradamente señalado en numerosos estudios, entre los que cabe mencionar el de Carlos F. Díaz Alejandro, *Ensayos sobre la historia económica argentina*, y la investigación de la Fundación Ford, titulada *Argentina, a sleeping giant*. Comparando los rendimientos agrícolas por hectárea del período 1935/39 con los correspondientes a 1970, se advierte que mientras Argentina experimentó un incremento en los rendimientos del trigo levemente superior a 30%, en Estados Unidos los rendimientos aumentaron 137%, en Canadá, 118%, y en México, 87%. El aumento de los rendimientos del maíz fue, a lo largo de ese mismo período, de 33% en Argentina, de 185% en Estados Unidos y de 111% en México. Con la producción ganadera sucede otro tanto.³

Los sectores ruralistas argentinos insisten en que el estancamiento agropecuario es producto de una política desfavorable de precios y de la inexistencia de una plena seguridad con respecto al futuro de las eventuales inversiones, pero lo cierto es que aun durante los períodos en que se pusieron en vigencia precios altos, los rendimientos no variaron en la misma medida que en la agricultura mundial. Por consiguiente, desde el punto de vista de la producción, la economía agropecuaria argentina se encuentra estancada con respecto a las necesidades de generar divisas para hacer frente a las importaciones que requiere el desarrollo industrial y para satisfacer plenamente el propio crecimiento demográfico. Por eso Argentina presenta pe-

riódicamente crisis en la balanza de pagos que sólo pueden resolverse con grandes devaluaciones. Esas devaluaciones constituyen el requisito indispensable para trasladar ingresos al sector agropecuario a través de un desplazamiento de los precios relativos, en detrimento de la industria y de los salarios reales.

Algunos gobiernos, entre ellos el del general Onganía, al que no se puede acusar de demagógico o de populista, intentaron corregir esa tendencia con la aplicación de impuestos que gravaban la renta que debía producirse a partir de un determinado rendimiento por hectárea, y no de la que efectivamente se producía con un rendimiento más bajo. Se buscaba, así, forzar la elevación de la productividad por hectárea. Pero, invariablemente, los ruralistas se pusieron sistemáticamente a todos los intentos, seguramente porque —en la pampa húmeda y en las grandes explotaciones— los beneficios son proporcionalmente mayores con bajos rendimientos y cultivos extensivos. El último proyecto para aplicar un impuesto a la renta potencial corrió por cuenta del ministro de Economía del general Perón, José Gelbard, y su secretario de Agricultura y Ganadería, Horacio Giberti, pero la oposición ruralista fue un elemento determinante en la caída de Gelbard. Con su separación del Ministerio se inició la política económica que culmina ahora.

En efecto, el sucesor de Gelbard, el doctor Alfredo Gómez Morales, empezó a liberar los precios sin adoptar medidas adecuadas en relación con el tipo de cambio y el comercio exterior. Después, Celestino Rodrigo provocó un verdadero desbarajuste con su política de devaluaciones y de mayor libertad de precios. Sin embargo, la política de ambos se estrelló contra la resistencia sindical, que lograba periódicos aumentos de salarios para contrarrestar las alzas en los precios. El penúltimo ministro de Economía del gobierno peronista, Antonio Cafiero, representó una forzada concesión a los sectores sindicales, pero la situación política ya era tan caótica y el desorden económico tan grave, que los salarios reales no lograron recuperarse. En la carrera inflacionaria los precios triunfaron rotundamente sobre los salarios, apoyados por una especulación sobre el dólar manejada desde un estrecho círculo financiero.

Solamente así pueden comprenderse las raíces más profundas de la violencia

política en Argentina. La política económica actual constituye el intento más serio e integral de volver al equilibrio social de los años treinta, pasando por encima de cuarenta años de historia. Para llevarlo adelante fue necesario no sólo fomentar el desprestigio inevitable del aparato político del peronismo y asistir a su desmoronamiento, sino también liquidar la presencia sindical: sólo así se puede intentar que los salarios reales se mantengan excepcionalmente reducidos, para volver a colocar a la economía agropecuaria en el sitio de privilegio que tuvo en la *belle époque*.

El futuro de esta estrategia depende de las resistencias que ella pueda originar, aun dentro del Gobierno, pero también de la manera en que el sector agropecuario se muestre dispuesto a enfrentar el problema de su baja productividad. Si el vuelco favorable hacia los precios relativos agropecuarios se cumple sin una drástica modificación en los rendimientos, la baja productividad agropecuaria se convertirá en un lastre aún más pesado para el resto de la economía, y el futuro no será fácil. Esta perspectiva sería diferente si sobreviniera un reordenamiento del mercado mundial de los alimentos, con un alza generalizada de precios. Este proyecto parece haber interesado a algunos círculos dirigentes de Estados Unidos, con fabulosas posibilidades en el comercio mundial de granos. En ese caso, no sólo los bajos salarios relativos de los trabajadores argentinos financiarán el porvenir de los ruralistas, sino que dicha perspectiva se apoyará también en el menor poder adquisitivo de los consumidores de los países importadores de alimentos del mundo. □

PERU

El largo muro de las interrogantes

Una reseña de la actual coyuntura peruana debe confrontar desde el comienzo una larga y variada gama de interrogantes.

Estas emergen en el terreno mismo de la situación de Perú y expresan las conductas y acciones de las fuerzas sociales, económicas y políticas imbricadas en un proceso que, hasta el día de hoy, se identifica como revolucionario.

Surgen, también —y pueden manifestarse como perplejidades varias— de las lecturas de los análisis más recientes.

3. Datos tomados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Argentina, y de la FAO.

O, sencillamente, pueden omitirse y arriesgar, entonces, las calificaciones más duras o más complacientes para esta "segunda fase" de una revolución que se iniciara en octubre de 1968.

A juicio de los analistas más avezados existen, por lo menos, tres vertientes que singularizan la actual coyuntura y operan como factores más permanentes y de largo alcance en el contradictorio proceso peruano.

Pueden enumerarse así:

- La crítica situación económica, que puede ejemplificarse en la disminución del ritmo de crecimiento: más de 6% en el período 1971/74, 4% en 1975 y 3% estimado para 1976.¹

- El hecho de que las contradicciones operen en una realidad conmovida por una serie de transformaciones estructurales e ideológicas llevadas a cabo a partir de 1968.

- La circunstancia nada desdeñable de que la conducción del proceso se realice desde las Fuerzas Armadas como institución.

Puede agregarse que es la consideración de estas tres vertientes la que conduce a los observadores a una caracterización de la actual coyuntura que no aparece como improbable: la "derechización" progresiva del régimen.

En efecto, las críticas que desde el seno mismo de las Fuerzas Armadas se han dirigido a lo que se denomina "el septenato" (octubre de 1968 a agosto de 1975) apuntan más hacia la cancelación del proceso que a la afirmación de una continuidad revolucionaria.

Ello no obstante, debe reconocerse que las manifestaciones oficiales —fundamentalmente los discursos del presidente, general Francisco Morales Bermúdez—² y las expresiones de civiles vinculados al proceso, afirman, en rigor, la continuidad, al tiempo que no ocultan las dificultades mayores.³

1. CEPAL; *Estudio económico de América Latina 1975*, vol. 3, p. 662, y *Quarterly Economic Review*, Perú, Bolivia, núm. 2, 1976, p. 21.

2. Discursos del general Francisco Morales Bermúdez de 31 de marzo y 24 de junio de 1976, en *La Prensa*, Lima, 1 de abril de 1976 y *El Comercio*, Lima, 25 de junio de 1976.

3. Francisco Miró Quesada, "Reflexiones sobre el proceso revolucionario peruano", en *El Día*, México, 12 de agosto de 1976.

En los hechos existe coincidencia sobre una fecha que se considera como un verdadero hito: el 16 de julio de 1976. Los analistas estiman que, a partir de ese momento, se asiste a una "derechización" de la revolución. Ese día se produjo el relevamiento del primer ministro del régimen, general Jorge Fernández Maldonado. Este militar es considerado como el líder de la tendencia progresista a nivel gubernamental y como una de las figuras más relevantes de la "primera fase".

La reestructuración ministerial que siguió al alejamiento del Primer Ministro deparó, a juicio de los observadores, otros hechos de gran significación, tales como la no inclusión en el nuevo gabinete de los generales Miguel Ángel de la Flor Valle y Enrique Gallegos Venero, hasta entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura, respectivamente. Ambos pueden ser definidos con los mismos rasgos que se adscriben al general Jorge Fernández Maldonado: vinculación estrecha con los orígenes del movimiento revolucionario y carácter progresista de sus posiciones.

Bernard Cassen, enviado especial en Lima de *Le Monde Diplomatique*⁴ registra el hecho de que en la capital peruana nadie dejó de percibir la significación verdadera de estas exclusiones y de la remoción del general Jorge Fernández Maldonado y apunta que hubo celebraciones de los acontecimientos en los barrios de la clase alta —Miraflores y San Isidro— en tanto que los dirigentes de izquierda y ultraizquierda evitaban pasar la noche en sus domicilios. No menos significativa parece la circunstancia de que un civil acceda a la cartera de Relaciones Exteriores, José de la Puente Radbill, definido como economista conservador y diplomático de carrera, perteneciente a la clase alta, y que intervino en las negociaciones para el pago de la compensación a la nacionalizada Marcona Mining Company.⁵

En torno a estos hechos puede agregarse el crecimiento de la importancia política de la Armada peruana, ostensible en el cambio ministerial ya que sus representantes acceden a cuatro carteras.

4. "La revolution en veilleuse", en *Le Monde Diplomatique* París, agosto de 1976.

5. "Perú; requiem for a revolution", en *Latin America*, 23 de julio, 1976.

Una de ellas —Ministerio de Integración— como consecuencia de la elevación a rango ministerial de la Oficina Nacional de Integración, dirigida por el almirante Jorge Dubois Gervasi.

Sobre la importancia política en ascenso de la Marina los comentaristas destacan que esta fuerza, a través, principalmente, de los ministerios bajo su control y dirección, puede introducir una orientación diferente a la que caracterizaba al régimen peruano en aspectos tan estratégicos como lo son la suerte del Pacto Andino, el estrechamiento de las relaciones con Chile y la política con respecto a la inversión extranjera.

"La coyuntura económica —dice el ya citado Bernard Cassen— ha jugado en su favor, si así puede decirse. Como muchos otros países subdesarrollados el Perú ha sufrido, a plenitud, las repercusiones de la crisis mundial y, notablemente, el aumento anual de 15 a 25 por ciento de las importaciones indispensables. En el mismo tiempo, sus exportaciones de materias primas sufrieron las alzas y bajas del mercado mundial."

En fecha más reciente, los comentaristas no dejan de señalar que la Marina peruana, como consecuencia de su "gran victoria política interna", es vista con simpatía por los militares de la Junta chilena, que a la vez recelan del aumento de su poder bélico en los últimos tiempos.⁶

El tema de la responsabilidad de la crisis económica actual traspasa los límites de las constataciones y aborda —sin miramientos— el territorio más político y candente de las imputaciones. Así, Guido Chirino Lizares —director de *Opinión Libre*, un periódico que se sitúa a la derecha del proceso y que actúa como crítico implacable de la "primera fase" de la revolución—, desde su columna "Al filo de la navaja"⁷ afirma:

"En cuanto a la crisis económica, ya nos estamos pareciendo los peruanos a los conejos de la fábula que disputaban sobre si eran galgos o podencos los canes que, finalmente, habrían de devorarlos. ¿Es importada la crisis? ¿Es autóctona? En una parte, por supuesto, es importada —cuando nuestros socios del Tercer Mundo nos subieron el precio del petró-

6. Daniel Waksman, "Nuestra América", en *El Día*, México, 27 de agosto de 1976.

7. *Opinión Libre*, núm. 45, Lima, 28 de junio de 1976, p. 12.

leo—. Pero, en otra parte, probablemente la mayor, es atribuible por entero al septenato.”

En esencia, la caracterización más acertada de la crisis de la economía peruana puede hacerse en los términos generales formulados por la Comisión Económica para América Latina:⁸

“En realidad dicho año [1975] constituyó un hito en la historia económica reciente del Perú, pues marca el momento en que se abre una profunda brecha entre la política de desarrollo emprendida a fines del decenio pasado e implantada vigorosamente desde entonces y la política coyuntural exigida por las repercusiones de la aceleración del proceso inflacionario que se produjo a partir de 1973.”

De otro modo: si bien un examen del proceso en el largo plazo puede legitimar las afirmaciones del Gobierno de Perú en el sentido de que la actual coyuntura —con sus cambios y variaciones en las tendencias— debe verse como necesaria etapa de normalización “técnica” de la economía, otros rasgos más aparentes y acuciantes de la actualidad plantean, a nivel político, otra larga serie de interrogantes. Para abordar el tema más ostensible —las conductas de las fuerzas políticas— ha de aceptarse que, en este orden, el régimen peruano vive en un estado de “excepción” caracterizado por deportaciones, represiones y persecuciones, orientadas, mayoritariamente, hacia las fuerzas de izquierda y del movimiento obrero.

Puede aducirse sobre el punto la deportación de Ricardo Díaz Chávez, abogado sindical, como consecuencia de la llamada “huelga de Vitarte”,⁹ o registrarse la muy reciente declaración de la Confederación Nacional de Trabajadores, de orientación cristiana, donde se estampó lo siguiente:

“Somos conscientes de que el Perú vive un momento de crisis y que todos los peruanos tenemos la obligación de contribuir a salir de la misma, pero somos conscientes, también, de que las represiones no conducen a nada.”

Y agrega que esas medidas

8. *Op. cit.*, p. 664.

9. Francisco Moncloa en su columna “Frente Único”, en *El Periodista*, Lima, 22 de julio de 1976; *Opinión Libre*, Lima, 18 de junio de 1976; *Equis*, núm. 41, Lima, 24 de junio de 1976.

“llevan a la desesperación a los perseguidos y a la impopularidad a los perseguidores [lo que] aleja la colaboración del pueblo con sus gobernantes.”¹⁰

Un recuento simplista de las fuerzas políticas imbricadas en el proceso peruano puede auxiliarse del consabido esquema de las oposiciones entre civiles y militares, y aún valerse de una interpretación de la historia continental que se conforma con la constatación de reiterados ciclos “civilistas” y “militaristas”.

Los hechos, sin embargo, parecen anotar otro tipo, más abigarrado, más realista, de consideraciones.

En el caso de Perú no pueden sorprender los intentos ya muy visibles de las fuerzas del APRA, con su discutido y discutible líder Víctor Raúl Haya de la Torre, para lograr una “apertura política” que se visualiza como la perspectiva más viable para el futuro del país. A esta “solución” no son ajenos los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas que aceptan la tesis del “desgaste” de las fuerzas revolucionarias de 1968 y no disponen de una respuesta adecuada frente a las presiones —civiles y militares— de derecha.¹¹

De otro lado, la presencia del ex-presidente Belaúnde Terry ha operado como catalizador de las Fuerzas de Acción Popular y sobre todo ha estimulado la movilización del sector empresarial privado y de algunos sectores de profesionales para apuntalar un llamado a elecciones, que se supone es la vía insoslayable para salir de una situación a todas luces insostenible.

Las organizaciones políticas de izquierda, con excepción del Partido Comunista, aparecen como atomizadas y, hasta donde se alcanza a distinguir, más preocupadas por las discusiones internas que por una acción unitaria de defensa de los postulados revolucionarios.

El Partido Comunista, por su parte, mantiene una actitud de cautela crítica frente a los acontecimientos, sin desligarse del proceso revolucionario que ha apoyado desde sus albores, en la misma medida en que reconocía el arraigo popular de los militares peruanos agrupados en torno del general Velazco Alvarado, y el avance de la obra revolucionaria.

10. *El Día*, México, 23 de agosto de 1976.

11. *Latin America*, art. cit.; “Impasse político y crisis económica”, en *Equis*, Lima, 24 de junio de 1976.

En términos generales puede decirse que para la izquierda peruana, expresada en sus grupos y partidos políticos, un llamamiento a elecciones no es garantía de una mayor democratización y sí, en cambio, un sesgo que llevaría al poder a las fuerzas que se consideraban derrotadas y que, hoy, reaparecen con espíritu revanchista.

Sobre todo cuando se advierte que, prácticamente, todos los integrantes de la cúpula militar que alcanzara el poder en 1968 han desaparecido del aparato de conducción de la revolución peruana. Estos dos hechos, señalados por Bernard Cassen, no agotan, como es obvio, la intrincada situación.

Puede arriesgarse una consideración final.

Los avatares del proceso peruano y su culminación en esta etapa han de tener una influencia decisiva en la correlación de fuerzas en todo el continente. La cancelación de la vida democrática y de los más elementales derechos humanos en el Cono Sur es, sin duda, la consecuencia de un poder ejercido, conjuntamente, por las oligarquías y los militares más reaccionarios.

Una conjunción de este tipo es la amenaza más seria que confrontan en Perú civiles y militares progresistas.

De ahí que el texto de esta reseña deba leerse bajo la rúbrica de una interrogante dramática y final. □

VENEZUELA

Una política nacionalista que ha tenido éxito

En el ámbito latinoamericano cada vez son menos los países que han logrado preservar el sistema democrático y mantener una política exterior nacionalista. Entre esos pocos Venezuela constituye un ejemplo sobresaliente, ya que ha logrado hacer frente con éxito a las presiones sociales y económicas internas así como a las intervenciones exteriores bajo las cuales han sucumbido, uno tras otro, numerosos gobiernos de este continente.

Es más, Venezuela ofrece una demostración convincente de que una política nacionalista, cuando se maneja con previsión e inteligencia, no sólo fortalece la independencia del Estado, sino que se

convierte en un instrumento de incomparable eficacia para el progreso general de la economía del país. Naturalmente, Venezuela es rica en petróleo, pero también lo fue durante los últimos cincuenta años, sin que esta circunstancia le permitiera superar un grave atraso en todos los órdenes, crear una industria manufacturera desarrollada que garantizara su porvenir y desterrar la miseria en que se debate aún gran parte de su población, para no hablar de su situación de dependencia con respecto a Estados Unidos.

La moderna política nacionalista de Venezuela tiene su antecedente en la década de los años cuarenta, cuando el Estado elevó a 50% su participación en las ganancias netas de las empresas extractoras y exportadoras de petróleo. Esta participación fue durante mucho tiempo la más alta lograda por cualquier país frente a las poderosas compañías petroleras internacionales y constituyó el ejemplo a seguir por los demás productores de petróleo. Sin embargo, puede decirse que dicha política no se perfila con absoluta claridad hasta 1960, año en que Venezuela y otras naciones fundan la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Lo ocurrido desde esa fecha es del conocimiento de todos. A principios de 1971 los miembros de la OPEP lograron modificar radicalmente las condiciones en que las compañías petroleras internacionales explotaban su oro negro y, en los años subsiguientes, aprovechando la favorable coyuntura internacional, aumentaron los precios del crudo en tal medida que sus economías recibieron ingresos adicionales por muchos miles de millones de dólares.

En lo que concierne a Venezuela, esta riqueza le ofreció una oportunidad única para modernizar y desarrollar su estructura productiva y afirmar su soberanía sobre sus recursos naturales.

El 1 de enero de 1975 el Gobierno nacionalizó la industria del mineral de hierro, principal producto de exportación venezolano (alrededor de 150 millones de dólares anuales) después del petróleo y base de una floreciente industria siderúrgica. Las reservas de este mineral se estiman en 2 800 millones de toneladas, suficientes para 100 años al ritmo de producción de 1974 (26.1 millones de toneladas). La indemnización pagada a las compañías norteamericanas fue de 101 millones de dólares.

La medida más trascendental, sin embargo, se produjo el 1 de enero de 1976, con la nacionalización de la industria petrolera. En esa fecha Petróleos de Venezuela (PETROVEN), la nueva entidad matriz estatal, tomó posesión de las 22 compañías extranjeras concesionarias —la Shell y la Creole eran las más importantes— y de las 16 empresas participantes, así denominadas por haber celebrado convenios de operación mancomunada con las concesionarias. La compensación global se fijó en 1 028 millones de dólares. La industria nacionalizada la maneja PETROVEN a través de 14 filiales, entre las cuales sobresalen LAGOVEN (antigua Creole) y MARAVEN (antes Shell).¹

Esa estrategia de rescate de recursos naturales y de fortalecimiento del poder económico del Estado en lo interno, se complementó con una política internacional destinada a afirmar la soberanía del país y a resistir en mejores condiciones las presiones externas.

Entre estas últimas, para no mencionar más que algunas, sobresalen las siguientes:

- La Ley de Comercio de Estados Unidos, que contiene una cláusula discriminatoria que excluye a Venezuela de los beneficios del comercio preferencial con esa nación, por pertenecer a la OPEP.

- Una sostenida campaña periodística y diplomática norteamericana para envenenar las relaciones de Venezuela con Guyana —parte de cuyo territorio, la Guyana Esequiba, reivindican los venezolanos— y con Cuba. Se acusó a Guyana de permitir el aprovisionamiento en su suelo de aviones cubanos que transportaban tropas a Angola y se hicieron circular rumores de que había tropas cubanas en territorio guyanés. Agregaban las informaciones de prensa que si Cuba había intervenido militarmente en un país africano, con mayor facilidad podía hacerlo en cualquier nación latinoamericana.

- Acuerdo de consulta entre Estados Unidos y Brasil, por el cual el primero reconoce a éste como la principal potencia de América Latina.

- Vaticinios de fracaso de la gestión estatal de la industria petrolera, a raíz de la nacionalización de las empresas extranjeras.

1. Para mayores datos véase *Comercio Exterior*, México, septiembre de 1975, pp. 1020-1022.

A pesar de estas presiones, Venezuela ha mantenido una política exterior de apoyo a los países del Tercer Mundo, de diversificación de sus relaciones económicas y de solidaridad con las acciones antiimperialistas latinoamericanas.

En lo que concierne al primer punto, cabe mencionar que sólo en 1974 y 1975 Venezuela aportó más de 2 700 millones de dólares en ayuda bilateral y multilateral destinada a los países en desarrollo. En 1976 tuvo una actuación sobresaliente en la Conferencia de la UNCTAD, en Nairobi, así como en la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional (norte-sur), en París, llevadas a cabo con el propósito de establecer un sistema de relaciones más equitativo entre los países en desarrollo y los industrializados. Asimismo, ha respaldado consistentemente la creación de asociaciones de productores, con objeto de defender los precios de las materias primas. Finalmente, en febrero del presente año recibió la visita del presidente Josip Broz "Tito", de Yugoslavia, el dirigente más destacado del movimiento de países no alineados. En esta ocasión ambos países se pronunciaron contra el imperialismo, el neocolonialismo y la dominación económica.

Al mismo tiempo, Venezuela se esforzó por establecer relaciones más estrechas con Japón. Europa occidental y los países socialistas, a fin de ir reduciendo su dependencia económica de Estados Unidos. En este contexto tuvo también importancia la reunión en Caracas de las organizaciones políticas socialdemócratas de Europa y América, con las cuales Acción Democrática —partido venezolano en el poder— tiene afinidades ideológicas.

En el ámbito propiamente latinoamericano, por último, Venezuela se solidarizó con las reivindicaciones panameñas sobre el Canal y denunció la responsabilidad de Estados Unidos en los golpes militares de derecha ocurridos en el continente. Simultáneamente, desarrolló una política de acercamiento con México, de apoyo a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y, junto con este país, pugnó por el establecimiento del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) como instrumento para acrecentar la cooperación regional, así como el poder de negociación de los estados miembros frente a los países industrializados.

La política nacionalista interna y externa de Venezuela forman parte del gran proyecto para transformar su economía, actualmente basada en la producción petrolera, mediante el desarrollo de la agricultura y una industrialización acelerada.

La producción de hidrocarburos ha venido disminuyendo ininterrumpidamente desde 1973, como consecuencia de una política deliberada de conservación de reservas por parte del Gobierno. A pesar de esto, los ingresos obtenidos de su exportación aumentaron enormemente gracias a la acción de la OPEP, que elevó el precio del barril de crudo de 3.11 dólares a principios de 1973 a un máximo de 14.43 dólares en 1974. Desde entonces, la cotización bajó a 11.50 dólares aproximadamente, pero aun así y no obstante el descenso de la producción se considera que el Estado Venezolano contará con fondos suficientes para realizar su gran proyecto.

En los tres últimos años, la producción venezolana de petróleo y los ingresos que proporcionó su exportación fueron los siguientes:

Año	Millones de barriles (diarios)	Ingresos anuales (millones de dólares)
1973	3.36	3 000
1974	2.97	8 970
1975	2.35	7 600

Para 1976, tras la nacionalización, el Gobierno proyectó una producción de 2.2 millones de barriles diarios e ingresos anuales de 5 700 millones de dólares. Todo indica que este objetivo será alcanzado, pues aunque en diciembre de 1975 la extracción declinó a un promedio de 1.6 millones de barriles diarios, en los meses subsiguientes comenzó a recuperarse y para julio el promedio registrado durante la primera mitad del año supera ligeramente el nivel fijado.

Las reservas de petróleo se calculan en 18 000 millones de barriles, suficientes para unos 20 años al nivel de producción actual. Además, el Gobierno ha decidido explotar las gigantescas reservas de petróleo pesado de la cuenca del Orinoco, estimadas en un mínimo de 700 000 millones de barriles, a pesar de las dificultades tecnológicas que este proyecto presenta. A este respecto, el ministerio de Minas anunció recientemente que el objetivo es extraer 300 000 barriles diarios de ese yacimiento para 1981.

Los cuantiosos ingresos obtenidos del petróleo permitieron a Venezuela acelerar la expansión de su economía en 1975, año en que la mayoría de las naciones del Tercer Mundo experimentaron graves dificultades al resentir plenamente las consecuencias de la recesión e inflación en los países capitalistas industrializados.

Oficialmente se informó que el producto nacional bruto de Venezuela creció a una tasa de 6.6% (5.1% en 1974), a pesar de haber disminuido la producción y, por consiguiente, las exportaciones de petróleo. Ese resultado se debió al dinamismo de los demás sectores de la economía, que registraron una tasa de aumento de 10.6% en 1975, contra 8.5% en 1974.

La política gubernamental de estímulo al desarrollo agrícola, con objeto de reducir las crecientes importaciones de alimentos (alrededor de 400 millones de dólares anuales) y crear una base sana para la industrialización del país, dio resultados satisfactorios, ya que el incremento fue de 6% aunque no se llegó a la meta prevista de 10 por ciento.

En lo que concierne a la economía externa, la situación del país siguió siendo favorable, si bien no en el mismo grado que en 1974. La balanza en cuenta corriente arrojó un superávit de 2 300 millones de dólares (4 030 millones en 1974), y la balanza comercial un excedente de 4 560 millones, contra 10 480 millones el año anterior.

Un hecho inquietante fue el desmesurado aumento de las importaciones de artículos suntuarios, lo que reduce las posibilidades de compra de bienes de capital necesarios para la industrialización. Aun así, las reservas de divisas continuaron elevándose y a fines de 1975 totalizaban 8 856 millones de dólares lo que situó a Venezuela en quinto lugar mundial por este concepto. La deuda exterior del país se elevó a 2 090 millones de dólares en diciembre de 1975 (2 010 millones a fines de 1974), y se la consideraba moderada al compararla con el monto anual de las exportaciones: 11 120 millones en 1975.

Dos problemas de importancias que aquejan a Venezuela son la inflación y el desempleo. La primera alcanzó una tasa de 12.2% en 1974 (20% según estimaciones no oficiales) y un porcentaje similar

en 1975. En los últimos meses de ese año y en los primeros de 1976 se registró una ligera desaceleración, pero la amenaza subsiste. En cuanto al desempleo, se considera que el número de desempleados y subempleados ascienda a 20% de la fuerza total de trabajo.

El 29 de abril de 1976, ante la persistencia de la inflación y de las elevadas compras al exterior de artículos de lujo —las tenencias de divisas habían declinado a 7 416 millones de dólares—, así como para seguir alentando a la producción agrícola, el Gobierno aprobó un programa económico de 18 puntos. De conformidad con el mismo, se reducirá el volumen del dinero circulante, se incrementará la construcción de viviendas, se restringirán los viajes de turismo al exterior, se disminuirá la adquisición de automóviles de lujo y otros artículos suntuarios, y se fomentará el ahorro; al mismo tiempo, se autorizaron precios más altos para determinados productos agrícolas.

A pesar de estas dificultades, en estos primeros seis meses la economía venezolana ha mantenido su ritmo de crecimiento y se espera que el mismo supere el 6% pronosticado a comienzos de 1976.

Mientras tanto, el Gobierno ha puesto en marcha su gran proyecto para la transformación de la economía. El V Plan de la Nación 1976-1980, anunciado en febrero, prevé una inversión equivalente a 52 100 millones de dólares en los cinco años, a fin de lograr una tasa de crecimiento promedio de 8.3% anual. La inversión del Estado ascenderá a 27 500 millones (53% del total) y comprenderá alrededor de 4 100 millones de dólares en préstamos del extranjero. La mayor parte de ese dinero se destinará a obras públicas (autopistas, "metro" en Caracas), ferrocarriles, centrales eléctricas (la hidroeléctrica "Raúl Leoni" generará las tres cuartas partes de la electricidad consumida en el país), acero (la producción pasará de 1.2 a 4.8 millones de toneladas) y aluminio (400 000 toneladas en lugar de 200 000 en la actualidad), así como a la expansión de la petroquímica y la agricultura.

A fines de abril, el ministro de Hacienda presentó al Congreso un proyecto de ley de crédito público (aproximadamente 10 000 millones de dólares), para financiar la primera parte del V Plan de la Nación. □

Las finanzas de América Latina tras la cola del ciclón

PABLO SERRANO CALVO*

Una vez que las grandes potencias han emprendido el camino de la recuperación económica, después de superar la crisis que afectó al mundo capitalista en el último trimestre de 1974 y el primero de 1975, la economía internacional ha entrado en una etapa de reajuste en la que la incertidumbre subsiste y los desequilibrios se agudizan.

Inicialmente Estados Unidos, luego Japón y, más recientemente, Alemania y Francia, uno a uno los países más poderosos han venido saliendo de la crisis más intensa que las economías de mercado hayan conocido desde la Gran Depresión. Esta recuperación, sin embargo, no ha sido fácil ni parece definitiva y, dada la interdependencia de los países, el que uno obtenga más oxígeno ha implicado frecuentemente la asfixia de los demás. Si esto ha ocurrido entre los desarrollados, en los cuales, por citar un ejemplo, las maniobras efectuadas con los tipos de cambio han desempeñado un papel que no se debe menospreciar, no tiene por qué no haber sucedido algo parecido en el caso de los países en desarrollo a través de otros conductos tales como el muy ostensible del comercio internacional.

En particular, lo que resulta de interés son las consecuencias de esta crisis de la economía capitalista para América Latina. Si bien por ahora no se cuenta con información completa de las principales variables económicas del área, ya se puede tener una aproximación del comportamiento, las tendencias y la situación actual de estas economías.

LA DECRECIENTE PARTICIPACION DE AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL

No hay que perder de vista que una vez terminada la segunda guerra mundial, América Latina fue perdiendo importancia dentro de la economía internacional. La guerra y el período inmediato trajeron un auge para las exportaciones de América Latina y si a principios del decenio de los cincuenta las exportaciones de la región representaban el 8.9% de las totales del mundo capitalista, en 1960 esta cifra había disminuido a 6.9%, en 1970 a 4.9 y en 1975 a 4.5 por ciento, en este último año a pesar de las abultadas exportaciones de petróleo.¹ Si se excluyese a Venezuela y a Ecuador, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la reducción de la participación sufrida por los demás países en el transcurso del presente decenio sería

aún más pronunciada: de un porcentaje de 3.9 en 1970 se pasó a uno de 3.1 en 1975, fundamentalmente como resultado de esta crisis. Quien dice exportaciones dice captación de divisas con recursos "propios" (aunque sólo sea formalmente), capacidad de importación y, en última instancia, crecimiento económico dentro del marco de las relaciones económicas internacionales establecidas.

Las reservas monetarias internacionales del área durante los últimos 25 años no han mostrado, sin embargo, la decadencia de las exportaciones; en efecto, en su conjunto han incluso aumentado su participación dentro de las totales del mundo capitalista, al pasar de 5.2% al principio de los cincuenta a 7.7% en 1975. Empero, al separar de nuevo a ambos países petroleros, que tuvieron ingresos extraordinarios por el alza en el precio del crudo, sí se advierte una drástica reducción en las reservas de los países latinoamericanos, particularmente entre 1973 y 1975 (años en que su participación pasó de 6.2 a 3.7 por ciento del total). Esto significa que los ingresos de capital que tradicionalmente han equilibrado la balanza de pagos del área, a pesar de su cuantía, no han sido suficientes para mantener, al menos en los últimos años, los niveles "normales" de reservas. La remisión de utilidades de la inversión extranjera y, en mayor proporción, el servicio de la deuda han contribuido a agotar las pautas de desarrollo seguidas en el pasado que, tal como se observa, no han hecho sino llevar a América Latina a un deterioro cada vez mayor y, ahora, a un estrangulamiento.

Si durante los tres primeros años del decenio de los setenta pareció darse un nuevo auge en América Latina, la crisis lo interrumpió para revertirlo finalmente de modo tajante. En efecto, las cifras registradas para el año de 1975 muestran una redistribución mundial de los recursos reales y financieros que dista de haber beneficiado a los países en desarrollo y, en concreto, a los latinoamericanos no petroleros. Este aspecto es el que fundamentalmente nos ocupará en estas reflexiones.

LA CRISIS ENTRE LOS PAISES RICOS

De hecho, la crisis fue de gran fuste. En el primer semestre de 1975 se redujo el crecimiento económico de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 5.1% y, si acaso, la recuperación del segundo semestre (3.8%) hizo que en el año se registrara un decremento en el PIB de estas economías desarrolladas de 2%.² Esta recesión de los países centrales fue la que dejó

* Egresado de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y diplomado en el Institut International d'Administration Publique, de París.

1. Véase *International Financial Statistics*, Fondo Monetario Internacional, Washington, mayo de 1976.

2. Datos proporcionados por la CEPAL, *Estudio Económico de América Latina, 1975*, vol. 1, México, p. 2.

sentir sus consecuencias sobre la periferia a través del comercio exterior.

En efecto, el volumen de las importaciones de los países industrializados disminuyó 10% en ese año: el correspondiente a Estados Unidos se redujo 13%, el de Japón 16% y el de la Comunidad Económica Europea 7%,³ restricciones impuestas al comercio exterior que a todas luces resultaron excesivas. En valor, los países industrializados registraron un aumento de sus importaciones de 0.4% en 1975, mientras que sus exportaciones se incrementaron 6.5%. Esto originó que su déficit comercial se redujera en cerca de la mitad con respecto al año precedente, al disminuir éste de 68 000 millones de dólares en 1974 a alrededor de 35 000 millones en 1975.⁴ Estados Unidos, por sí solo, pasó en ese año de un déficit de 9 000 millones de dólares a un superávit de 4 000 millones. Tal como señala el *Estudio económico de América Latina, 1975* de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), "esta notable recuperación de la posición comercial de los países centrales se logró claramente a expensas de la periferia".

Si se considera la balanza en cuenta corriente, la recuperación aún resulta más favorable para los países industrializados: de un déficit de 27 000 millones de dólares en 1974 pasaron a un superávit de 2 000 millones en 1975. Dentro de este grupo de países, los más avanzados, o sea los que ya han dado pasos sólidos en su recuperación, tuvieron un mejor comportamiento en su cuenta corriente. En concreto, Estados Unidos pasó de un déficit de 3 000 millones de dólares a un superávit de 11 000 millones en el transcurso de un año. Las remisiones por utilidades e intereses provenientes del resto de los países desempeñan un papel de gran importancia en este ámbito.

LA RECIRCULACION DE LOS "PETRODOLARES"

En cambio, el valor de las exportaciones de los países exportadores de petróleo se vio reducido 7.5% en 1975 como consecuencia de las contracciones hechas en las compras de crudo por parte de los países industrializados y en desarrollo. Por su parte, como resultado de las grandes reservas de divisas acumuladas en 1974 y todavía en 1975, este grupo de países aumentó sus importaciones en cerca de 62% en este último año. Aun así, estos países obtuvieron un saldo comercial superavitario de 57 000 millones de dólares en 1975 que, si bien es considerablemente más pequeño que el de 1974 (87 000 millones de dólares), no carece por ello de gran significación. El superávit en cuenta corriente de este grupo de países fue en 1975 de 34 000 millones de dólares, la mitad del de 1974.⁵

Si bien se advierte que ha decrecido la intensidad del movimiento de recursos financieros hacia los países exportadores de petróleo, como contrapartida de sus ventas de hidrocarburos, y que los países industrializados aumentan su participación dentro del total en lo que a sus reservas monetarias internacionales se refiere, dichos "petrodólares"

siguen teniendo aún importancia, aunque ya declinante. Las tendencias registradas en el primer trimestre de 1976 muestran una acumulación cada vez menor de divisas por parte de los países petroleros y una mayor por parte de los países industrializados. De este movimiento, sin embargo, los países en desarrollo no obtienen ninguna ganancia, sino crecientes déficit en cuenta corriente.

UN TERCER MUNDO DETERIORADO

La contracción de las importaciones de los países desarrollados durante 1975 fue, sin duda, una de las causas de la reducción del valor de las exportaciones de los países en desarrollo no exportadores de petróleo (1.6% en ese año). Dentro de esta reducción, en relación directa con la contracción de la demanda de los países desarrollados, un factor que resultó fundamental fue el acentuado descenso de los precios de las materias primas de exportación de los países del Tercer Mundo en 45% con respecto a los de 1974.⁶ Dado que las importaciones de estos países crecieron 5.6% el déficit comercial de este grupo aumentó de 35 000 millones de dólares en 1974 a 43 000 millones en 1975. A pesar de las salidas adicionales por utilidades remitidas e intereses por concepto de la deuda, los ingresos de la cuenta de servicios permitieron que el déficit en cuenta corriente se situara en 35 000 millones de dólares en 1975, nivel superior al registrado en 1974, que fue de 28 000 millones. En términos absolutos no se ha dado una disminución de las reservas monetarias internacionales de los países en desarrollo no exportadores de petróleo en los últimos dos años, aunque en términos relativos la disminución de su participación sí ha sido sintomática de la pérdida de vigor y de presencia de este grupo en el escenario mundial. De esta forma, los inmensos déficit han sido compensados por entradas masivas de capitales; de ellos, los menos provienen de los organismos internacionales. Los países de la OPEP destinaron los mayores montos de su financiamiento al Medio Oriente y al África septentrional, y el resto de los países debieron acudir a los mercados de capitales, en los que las tasas de interés imperantes fueron más altas que las de años precedentes y los plazos de vencimiento de los créditos más cortos. En los próximos años, pues, el Tercer Mundo se enfrentará a serias exigencias de pagos al exterior.

AMERICA LATINA TRAS LA COLA DEL CICLON

Dentro de las pautas generales en que se desarrollaron los países en desarrollo no exportadores de petróleo en 1975, se puede ubicar muy fácilmente a la mayoría de los países latinoamericanos. Resulta obvio que los países petroleros del área (Venezuela en particular) corrieron con una suerte distinta, por lo que se les puede considerar atípicos.

En conjunto, según las estimaciones de la CEPAL, las economías de América Latina crecieron en 1975 a una tasa de 2.6%, que es inferior al crecimiento de la población (2.8% anual). Este porcentaje contrasta con el registrado en prome-

3. Véase CEPAL, *op. cit.*, p. 3.

4. Datos del *International Financial Statistics*, FMI, citados por la CEPAL, *op. cit.*, p. 5.

5. Véase el cuadro correspondiente en CEPAL, *op. cit.*, p. 10.

6. *International Economic Report of the President*, U.S. Government Printing Office, Washington, marzo de 1976, citado por la CEPAL, *op. cit.*, p. 8.

dio durante el período 1971-74 (6.7% anual), lo que equivale a incrementos del producto *per capita* de 3.8% al año.⁷

Los países exportadores de petróleo consolidaron en 1975 buenas tasas de crecimiento. Venezuela logró una de 6.6%, Ecuador de 8%, y Bolivia de 6.8%.⁸ Por lo demás, el resto de los países, salvo excepciones, tuvieron tasas de crecimiento inferiores a las tradicionales. Entre los países que tuvieron un crecimiento superior al de la población destacan Brasil (4%), Colombia (4.8%), México (3.9%), Perú (4%), la República Dominicana (6.2%) y Uruguay (3.6%). Es de llamar la atención que la central hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú, que se construye entre Paraguay y Brasil, contribuyó enormemente a que la pequeña economía paraguaya creciera en un 8%. Contrariamente, se dieron reducciones de importancia en Argentina (1.4%) y, sobre todo, en Chile (14.7%), donde los consejos de la Escuela de Chicago no parecen haber sido los más acertados.

La mayor parte de los resultados anteriores de las economías latinoamericanas obedece a los efectos transmitidos a través del sector externo, sin querer con ello decir que ciertos factores internos no confluyeran en esta crisis. El valor de las exportaciones del área decreció 11.2% en 1975, mientras que el de las importaciones aumentó 7%. Estos porcentajes mostraron reducciones drásticas, especialmente el correspondiente a las exportaciones, en particular si se le compara con los niveles de aumento de 1974 (superiores a 60%). Las reducciones más acusadas se observaron en los países exportadores de petróleo (24.4%), aunque entre los países no exportadores de crudo (que en conjunto tuvieron una reducción de 1.3%) hay países como Argentina y Chile con disminuciones superiores a 25% en el valor de sus exportaciones. Se señala que el poder de compra de las exportaciones latinoamericanas sufrió una merma de 20% y el hecho es que la balanza comercial de la región fue deficitaria en cerca de 6 000 millones de dólares, cuando en 1974 había sido superavitaria en más de 2 000 millones. La CEPAL, al analizar sus datos, señala que alrededor de 75% de dicho giro fue consecuencia del comportamiento del comercio exterior de los países exportadores de petróleo del área.

A diferencia del conjunto de países en desarrollo, en el que la cuenta de servicios propició una mejoría del déficit comercial, en la América Latina no exportadora de petróleo, la remisión de utilidades y el pago de intereses por la deuda externa supera en mucho a los ingresos por exportación de servicios, tales como los de turismo, entre otros. Particularmente en el año de 1975 se dio un incremento inusitado en el pago de dichas utilidades e intereses (37%), ya que de un monto de 4 150 millones de dólares en 1974 se pasó a uno de 5 700 millones en 1975. El 75% de este incremento es atribuible tan sólo a los países más endeudados: Brasil y México. En cambio, los países exportadores de petróleo del área tuvieron una reducción de 4 860 a 2 220 millones de

dólares en 1975 por estos conceptos. En suma, el déficit en cuenta corriente del área en su conjunto ascendió a 13 626 millones de dólares, cuando en 1974 había sido de 6 607 millones y en 1973 de 3 564 millones. Si se excluye a los países exportadores de petróleo, la cifra correspondiente a 1975 se eleva a 16 378 millones de dólares.⁹ Tan sólo para tener una comparación del orden de magnitudes, conviene recordar que el superávit de Estados Unidos para ese año fue de 11 000 millones de dólares. Con el mismo propósito comparativo, del déficit total de los países en desarrollo no petroleros correspondió a América Latina cerca de 47 por ciento.

UNA MAYOR DEPENDENCIA DEL CAPITAL EXTERNO

Ante un mercado que se cierra a los productos de exportación y ante precios de venta de esos productos que han sufrido una drástica reducción, los países latinoamericanos han acudido primeramente al capital externo con el fin de equilibrar los pagos con el exterior, tal como lo exige el sistema de ajuste de balanza de pagos en vigor.

Si en 1974 los ingresos de capital de los países latinoamericanos no exportadores de petróleo fueron de 10 400 millones de dólares, en 1975 esta cifra ascendió a 14 000 millones. De éstos, según señala el BIRF, 80%, o sea, más de 11 000 millones, provino de fuentes privadas.¹⁰ Cabe recordar que fue en 1975 cuando las tasas de interés se elevaron en mayor proporción en los mercados internacionales y las condiciones que conllevaron esos préstamos incluían períodos de vencimiento más cortos que en el pasado.

El financiamiento concedido por los organismos internacionales también ha sido creciente. El BIRF otorgó en el año fiscal 1974-75 (que termina el 30 de junio) préstamos por 1 215 millones de dólares y en el año 1975-76 cerca de 1 450 millones. A fines del primer semestre de 1976, el total acumulado de préstamos de este organismo a América Latina ascendía a cerca de 9 800 millones de dólares, alrededor de 30% del total concedido. Brasil y México siguen siendo los principales clientes del BIRF en el mundo¹¹ y han absorbido más de la mitad de los recursos destinados a América Latina.¹²

Por su parte, las compras netas de monedas efectuadas durante 1975 por los países latinoamericanos y del Caribe al Fondo Monetario Internacional (FMI) ascendieron a 428 millones de derechos especiales de giro (DEG), lo que equivale a cerca de 515 millones de dólares, y las realizadas

9. Esta cifra de la CEPAL concuerda con la publicada por el BIRF, que registró un déficit en cuenta corriente de 22 países latinoamericanos, excluyendo Venezuela, de más de 16 000 millones de dólares en 1975. Véase *World Bank Annual Report 1976*, Washington, 1976, p. 51. Por su parte, el FMI consigna un déficit en 1975 de 17 000 millones de dólares. Véase *Boletín del FMI*, Washington, 12 de julio de 1976, p. 197.

10. Véase *World Bank Annual Report 1976*, BIRF, Washington, 1976, p. 51.

11. Si bien la India lo es de su filial, la Agencia Internacional del Desarrollo (AID), con montos considerablemente superiores.

12. Véase BIRF, *op. cit.*, apéndice 2, pp. 152-153.

7. Véase "La evolución Económica de América Latina en 1975". Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina, CEPAL, núm. 216, junio de 1976, Santiago de Chile.

8. Bolivia, por no ser miembro de la OPEP, no es considerada exportadora de petróleo por el FMI en su clasificación, aunque sí por la CEPAL.

en los cuatro primeros meses de 1976, a 303.7 millones de DEG (365 millones de dólares, aproximadamente).¹³

En suma, la deuda externa de América Latina ha crecido en estos últimos dos años a un ritmo vertiginoso. Si ésta era de 36 359 millones de dólares en 1973, al año siguiente había ascendido a 45 385 millones,¹⁴ y para 1975 se habla de 55 000 millones de dólares; esto es, un aumento de 50% en un lapso de dos años.

Sin embargo, este endeudamiento y las inversiones extranjeras directas no han bastado para que los países latinoamericanos no exportadores de petróleo mantengan su equilibrio externo, dadas las salidas de recursos por concepto de utilidades e intereses. Así, un segundo recurso fue la pérdida de reservas monetarias internacionales, de 6% en 1974 y de cerca de 20% en 1975 (o sea, cerca de 2 200 millones de dólares de reducción en este último año). Los países exportadores de petróleo, en cambio, tuvieron un aumento de reservas superior a 2 500 millones de dólares que, a pesar de ser cuantioso y de haber hecho que en su conjunto las reservas del área aumentaran ligeramente, resulta mucho menor que el obtenido en 1974. Finalmente, algunos países agotaron las dos primeras posibilidades o bien optaron por acudir al expediente de la devaluación.

En cuanto al primer aspecto, cabe destacar que, de acuerdo con los datos de la CEPAL, del total del capital que ingresó a América Latina correspondió 70% a Brasil y México y un 15% adicional a Argentina, Jamaica y Perú.¹⁵ Igualmente, se ha indicado que, dadas las altas tasas de interés imperantes en los mercados internacionales y los relativamente cortos períodos de vencimiento de los créditos, la carga que tendrán estos países en el futuro próximo, si no es que ya en la actualidad, ejercerá presiones enormes sobre la balanza de pagos de los más endeudados.

En cuanto a las reservas, Brasil fue el país que en cifras absolutas más divisas perdió (1 250 millones de dólares), seguido por Argentina, que vio las suyas disminuidas en 900 millones de dólares, lo cual implicó una reducción de cerca de 66% de los niveles que mantenía en 1974.

Finalmente, en cuanto a devaluaciones, además de las consecutivas minidevaluaciones puestas en práctica en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, que sumadas han representado alteraciones sustanciales en el tipo de cambio, es de destacar la devaluación (31%) del sol peruano y el reciente abandono de la paridad del peso mexicano, mantenida durante 22 años. En los inicios de su flotación esta moneda se había depreciado 60% frente al dólar.

LA CULPA ES NUESTRA... ¿O DE NUESTRA ESTRELLA?

El llamado orden económico internacional no implica sino un sistema rígido de relaciones comerciales, monetarias y financieras entre los países. La reciente crisis de las econo-

mías de mercado y la posterior recuperación de algunas de ellas ha puesto de manifiesto los desequilibrios, desajustes y desigualdades que impone ese orden que permite que ciertos países, con tal de superar sus problemas propios, afecten seriamente a otros. Y como son los países poderosos los que imponen sus condiciones y en sí las reglas del juego, no resta a los países endeblés sino acatar las consecuencias.

Los datos anteriores, aunque generales, resultan ilustrativos de la situación por la que atraviesa América Latina. Tal como se señaló, la tendencia secular de América Latina en los últimos 25 años ha sido declinante en cuanto al lugar que ocupa dentro de la economía internacional. Si en la década de los setenta pareció darse una recuperación en el conjunto de sus economías, la crisis del sistema capitalista de 1974-75 acabó con cualquier asomo de mejoría.

El aumento en el precio del petróleo hizo que exportadores y no exportadores tuvieran una suerte distinta. Los primeros, por lo general, acumularon reservas, además de que con las divisas obtenidas incrementaron sustancialmente las importaciones que canalizan a su desarrollo e incluso exportaron capitales, ya sea en forma concesionaria o de inversiones extranjeras. En América Latina, Venezuela ha sido el único país que ha podido hacerlo, pues Ecuador se enfrentó a nuevas dificultades impuestas por el exterior que comprometieron no sólo su soberanía sobre el petróleo sino la propia estabilidad de su gobierno.¹⁶

La suerte de los países no exportadores de petróleo ha sido bien distinta. El descenso en el precio de sus materias primas y el cierre de mercados externos los ha golpeado duramente: endeudamiento, que se paga caro; crisis monetarias, que se arreglan con los consabidos programas de estabilización y crisis sociales y políticas que conducen a aberraciones que marcan irremediablemente a generaciones completas.¹⁷

Más sin petróleo que con él, las relaciones de dependencia se agudizan y, en última instancia, acaban por envolver a la totalidad de los países en desarrollo. Todavía, ante este panorama, un funcionario del FMI habla de "la renuencia de los mismos a adoptar severas medidas de ajuste".¹⁸ ¿Qué disyuntiva resta, pues, frente a estas rígidas relaciones económicas internacionales?

"...El se pasea por el estrecho mundo como un coloso —escribió una vez Shakespeare—. Y nosotros, turba mezquina, caminamos bajo sus piernas de gigante, y atisbamos por todos los lados para ver de encontrar para nosotros una tumba sin honra. Alguna vez los hombres son dueños de su destino. La culpa, querido Bruto, no es de nuestra estrella, sino de nosotros mismos, si consentimos en ser inferiores." □

16. Véase "Ecuador: el golpe de Estado y el festín petrolero", en *Comercio Exterior*, México, febrero de 1976, p. 186.

17. Para un tratamiento brillante de las consecuencias sociopolíticas de la crisis económica en América Latina, véase Alvaro Briones, "América Latina: crisis económica y fascismo dependiente", en *Comercio Exterior*, México, agosto de 1976, p. 927.

18. Véase Jorge del Canto, *loc. cit.*

13. Véase Jorge del Canto, "1976 ofrece buenas perspectivas para el crecimiento económico de América Latina", en *Boletín del FMI*, Washington, 12 de julio de 1976, p. 197.

14. BIRF, *op. cit.*, Anexo estadístico, cuadro 2, pp. 98-99.

15. Véase CEPAL, *op. cit.*, p. 64.